EL SOCIALISTA centroamericano

160

Segunda Quincena
Julio 2013

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00 Nicaragua: C$ 10.00
El Salvador: US $ 0.60 Costa Rica: ₡ 500.00

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana"

HONDURAS: !ABAJO LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR! !DEFENDAMOS EL ROL DE LA UNAH Y FORTALEZCAMOS SU AUTONOMÍA!



34 Aniversario del triunfo de la insurrección contra Somoza



El Papa en Brasil estrena nuevo discurso de la Iglesia Católica



Honduras: trabajadores de HONDUTEL luchan contra la privatización



GUATEMALA.- Movilizaciones contra instalación de Cementera



EL SALVADOR.- Manipulación política de Violencia y Delincuencia



NICARAGUA.- El sandinismo vive su mejor momento

HONDURAS: ¡ABAJO LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR! ¡DEFENDAMOS EL ROL DE LA UNAH Y FORTALEZCAMOS SU AUTONOMÍA!

Esta última quincena se ha producido un repunte de las luchas obreras y estudiantiles en Honduras. Los detonantes han sido la ejemplar lucha de los trabajadores de Hondutel contra la privatización que impulsa el gobierno de Porfirio Lobo, las reformas a la Ley de Educación Superior que pretenden darle mayor participación a las universidades de capital privado, en la toma de decisiones vinculantes en materia de educación, la lucha de los estudiantes de secundaria por recuperar el bono escolar y la lucha del magisterio contra los atropellos del ministro Marlon Escoto.

El deterioro de la educación pública no es un fenómeno estrictamente de Honduras sino que a nivel centroamericano se han dado procesos muy similares. Por ello se produjeron luchas estudiantiles en la Universidad de San Carlos (USAC), en Guatemala, y en las universidades de Costa Rica, solo para mencionar los ejemplos más relevantes. La política de los gobiernos regionales para superar la crisis fiscal consiste en implementar "reformas fiscales" que aumentan los tributos y reducen el gasto público, atacando la educación pública.

En ese marco, hace más de tres años el diputado del Partido Nacional, Ricardo Díaz, presentó ante el Congreso Nacional la propuesta de Ley de Educación Superior, que en esa coyuntura no contaba con la aprobación de Julieta Castellanos, quien acababa de ser nombrada rectora de la **Universidad Nacional de Honduras (UNAH).**

Bajo la administración de Julieta Castellanos se produjo una mejoría de la infraestructura de la UNAH y una mayor eficiencia del aparato administrativo, a costa de suprimir la participación de los estudiantes y trabajadores universitarios de los organismos de gobierno. Castellanos ha concentrado el poder absoluto en sus manos. Por otro lado, ha incumplido de forma sistemática con las disposiciones contempladas en los convenios laborales no otorgando los aumentos contemplados en el Estatuto del Docente universitario y en el décimo cuarto Contrato Colectivo.

Julieta Castellanos, que aspira a la reelección, y como pago por los favores obtenidos por Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, cabildeó la reforma a la Ley Orgánica de la UNAH, logrando imponer la reelección del rector. Pero la burguesía no otorga ningún favor político sin exigir nada a cambio.

La propuesta de **Ley de Educación Superior** se negoció con las mercantilistas universidades privadas y se integró una mesa de diálogo permanente conformada por los rectores de las universidades públicas y privadas, sin participación de trabajadores, profesores y estudiantes.

Las reformas al sistema de educación superior conceden autonomía a las universidades privadas, otorgándoles independencia política y administrativa respecto a la UNAH, violentando de esta manera el artículo 160 de la Constitución de Honduras que ordena que la UNAH "goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional".

De igual manera, dentro de las reformas propuestas contemplan la creación de entes autónomos subvencionados con dinero del Estado y de la empresa privada como el **Sistema Hondureño de Acreditación de la Educación Superior (SHACES),** éste le quitaría a la UNAH todo vínculo directo en la regulación de la educación superior.

Una vez más los estudiantes universitarios de Honduras se ha levantado en defensa de la educación pública y en defensa del rol de la UNAH. Solo la movilización popular hará retroceder al gobierno de Porfirio Lobo. Las autoridades universitarias han apuñalado a la UNAH, por ello desde el **Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)** llamamos a los estudiantes (secundaria y universitarios) de Honduras a luchar junto a docentes y trabajadores a conformar un bloque unitario de lucha que garantice la defensa de la educación pública y fortalezca el rol de la UNAH y su autonomía.

EL SOCIALISTA centroamericano

Impresión: 28 de Julio de 2013

No. 160
Segunda quincena de Julio 2013

EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO es una publicación del PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA) , fundado y reconstituido el dìa 4 de Abril del año 2009. Se publica en dos formatos: una versión digital que se actualiza diariamente (www.elsoca.org) y otra versión impresa que se publica quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión editorial del PSOCA, sino la exclusiva responsabilidad de sus autores.

DIRECTOR: *Victoriano Sánchez*
CONSEJO EDITORIAL:
Armando Tezucún, Germán Aquino, Maximiliano Cavalera, Gerson de la Rosa, Eduardo Villalobos, José Manuel Flores Arguijo (in Memorian)

AQUI NOS ENCONTRÁS
www.elsoca.org
Redacción: **elsoca@elsoca.org**
Secretariado Ejecutivo: **psoca@elsoca.org**

Secciones:
psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org



LOBO BUSCA UN SOCIO INEXISTENTE PARA HONDUTEL

Por Dionisio Xatruch

Los trabajadores de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) vienen librando una dura batalla por preservar la empresa estatal, y con ello sus puestos de trabajo.

Pérdida del monopolio estatal

Desde su creación, en el año 1976, Hondutel mantuvo el monopolio de las telecomunicaciones hasta el año 1996, cuando bajo el gobierno de Carlos Roberto Reina, se produjo una privatización parcial de las telecomunicaciones, con la concesión de telefonía móvil otorgada a favor de la empresa transnacional Celtel (que posteriormente se convirtió en Tigo).

En el año 2001, bajo el gobierno de Carlos Roberto Flores, se produjo una nueva privatización parcial de telefonía móvil a favor de la transnacional Megatel (que posteriormente se convirtió en Aló y Claro). En el año 2007 se creó Honducel, una empresa de telefonía celular cuyo dueño es Hondutel, la cual comenzó a competir en desventaja en relación con las transnacionales. En 2008, CONATEL otorgó una nueva concesión a favor de Digicel, la cual terminó siendo absorbida por Claro. Esta fusión mostró la tendencia a crear grandes monopolios privados, en detrimento de los usuarios.

Esta historia de privatizaciones parciales ha resultado mortal para Hondutel, porque si bien es cierto no se ha vendido todavía la empresa, ésta ha quedado reducida a la mínima expresión, peleando el mercado contra poderosas transnacionales.

Corrupción y descapitalización

Las privatizaciones parciales del espectro radioeléctrico cortaron las piernas y los brazos a Hondutel. Desde entonces, la empresa arroja pérdidas que se ven agravadas por el saqueo de los gobiernos de turno.

Jesús Castellanos, ex gerente de Hondutel y recientemente destituido por Porfirio Lobo de su cargo de presidente de la Junta Interventora de Hondutel, denunció que los gobiernos de turno han sacado más de 20,000 millones de Lempiras de esta empresa.

Además, como Hondutel perdió el monopolio del espectro radioeléctrico, debe competir con las transnacionales, y por ello ha tenido que pagar 4.400 millones por la interconexión. Si a lo anterior agregamos 2.400 millones de



Trabajadores de Hondutel exigen mas presupuesto a Congreso Nacional

lempiras que han sido pagados por licencia de importador internacional, tenemos un panorama desolador para la empresa estatal.

Los cantos de sirena de la "empresa mixta"

Una de las causas de la destitución de Castellanos fue que presentó un plan de rescate de la empresa estatal: Hondutel necesita 600 millones de dólares para salir adelante. Pero el gobierno de Lobo ha sido tajante: no quiere rescatar a Hondutel, sino privatizar parcialmente la empresa, argumentando que se requiere un socio privado, crear una "empresa mixta", y recomendó a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), que se encargue de buscarlo. Pero esta institución se deslindó de la propuesta de Lobo. Esta infructuosa búsqueda ya lleva más de 3 años. La primera licitación pública para vender una parte de Hondutel fue declarada desierta el 25 de enero 2013, por falta de oferentes.

La propuesta de Lobo pretende rematar definitivamente a Hondutel. Ningún empresario quiere darle oxígeno a Hondutel, más bien quiere terminarla de quebrar para comprar sus restos por algunos centavos, especialmente los servicios más rentables como internet y telefonía celular El socio imaginario que habla Porfirio Lobo, en realidad no existe. Es una estratagema para vencer la resistencia del pueblo que se opone a la liquidación de las empresas estatales.

SITRATEL propone plebiscito

Orlando Mejía, presidente del Sindicato de Trabajadores de Hondutel (Sitratel), ha lanzado la propuesta de convocar a un plebiscito para que el pueblo opine y decida si está de acuerdo con los planes del gobierno de Lobo de rematar Hondutel.

Mientras tanto, Sitratel sigue luchando por conseguir fondos inmediatos, desarrollando movilizaciones callejeras para exigirle al Congreso Nacional que apruebe fondos necesarios para evitar el colapso de la empresa.

Demagogia electorera de Romeo Vásquez

El general golpista Romeo Vásquez, que fue nombrado gerente de Hondutel en el periodo 2010-2013, se ha transformado repentinamente en un defensor de la empresa estatal. Obviamente, esta es una pose demagógica para ganar votos en la campaña electoral, sobre un tema sensible para la mayoría de hondureños.

La clase trabajadora debe ser vanguardia en esta lucha

Los trabajadores de Hondutel y Sitratel están peleando solos, defendiendo la empresa estatal. Han sido reprimidos y gaseados por la Policía, pero siguen luchando. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los sindicatos, centrales obreras y demás organismos populares a cerrar filas en la defensa de Hondutel, exigiendo que el Congreso Nacional apruebe el presupuesto que permita salvar la empresa, mientras luchamos por la convocatoria de un plebiscito y convencemos a la mayoría del pueblo de la necesidad de devolver el monopolio del espectro radioeléctrico a favor del Estado y de su empresa Hondutel.



MANIPULACIÓN POLÍTICA DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA

Por Lisandro Espinoza

En los años ochenta la situación económica que vivía el país y la violencia generada por el conflicto armado eran los problemas fundamentales de los cuales la población salvadoreña clamaba una solución. Paradójicamente, en estos momentos estos problemas aún son la preocupación principal del ciudadano salvadoreño.

El Acuerdo de Paz entre FMLN y ARENA no solucionó los problemas

La situación económica había llevado al surgimiento de estructuras políticas-militares revolucionarias que amenazaban con arrebatar el poder a la clase dominante. Como respuesta, el imperialismo y la oligarquía salvadoreña implementaron la violencia estructural del estado y de estructuras paramilitares (como los escuadrones de la muerte), lo que implicó el uso de las Fuerzas Armadas y de todos los cuerpos represivos de seguridad. Ante la imposibilidad del gobierno de derrotar militarmente a la guerrilla salvadoreña, con la llegada del gobierno de Napoleón Duarte del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se inició un proceso de diálogo entre el gobierno y la guerrilla del FMLN, lo cual era visto desde diferentes ópticas por los representantes de las organizaciones que integraban el FMLN. Para unos el diálogo debería ser utilizado de manera táctica, pero otros lo vieron como el puente para llegar a la negociación. Con la muerte de líderes obreros, como Cayetano Carpio se abrió una nueva etapa en la cual se pasó abiertamente del diálogo a la negociación.

Con la llegada de ARENA al gobierno se firmó en 1992 el Acuerdo de Paz; de esta forma la derecha arenera estaba otorgando "la paz que tanto clamaba la población salvadoreña", lo que le daba prestigio político ante la población, aunque en realidad no estaba solucionando los problemas económicos, pero ello le importaba poco. Al contrario, inmediatamente se profundizó el modelo económico neoliberal y la privatización de muchas instituciones del estado, y con ello nuevamente los problemas económicos, la violencia y la delincuencia volvieron a ser los principales problemas sentidos por la población. En el pasado evento electoral la solución a dichos problemas fue parte de las promesas de campaña realizadas por el FMLN y ARENA. En el Acuerdo de Paz entre la ex guerrilla de FMLN y ARENA no se tocó el sistema capitalista e inclusive solo maquilló el aparato represivo militar.



Luis Martínez, Fiscal General de la República y David Munguía Payes, Ministro de Defensa, se abrazan y reconcilian

ARENA campaña electoral con el tema de la violencia

La derecha arenera se olvida de que a pocos años del tan alabado acuerdo de Paz ya la delincuencia empezaba a repuntar, lo que llevó en 1993 a representantes de ONUSAL a manifestar que "existía una progresión cualitativa del impacto de la violencia que se expresaba en que los asesinatos contradicen la expectativa de seguridad a la que aspiraba la población salvadoreña una vez finalizado el conflicto". En aras de mantener dichas expectativas entre la población los gobiernos areneros utilizaron a las fuerzas armadas para que hicieran labores de seguridad (algo que fue muy criticado por la dirección del FMLN), llegando a implementar los planes de mano dura con los cuales golpeó a las estructuras criminales; pero los planes solo eran una solución temporal a la problemática, pues tan solo obligaron a estas estructuras a perfeccionarse para poder sobrevivir.

Con la llegada de FMLN y de Funes al gobierno, en momentos en que el capitalismo enfrenta una de sus peores crisis, la violencia y delincuencia atribuida a las Maras y las pandillas continúa en ascenso, aunado a la campaña mediática de la derecha arenera que busca hacer ver al gobierno como incapaz. La respuesta a este problema por parte del gobierno de Funes y del FMLN inicialmente fue la misma política represiva y de uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad de los gobiernos areneros, que en la práctica han demostrado ser inefectivas.

De la rebelión contra la Ley de Proscripción a la tregua

En el 2010, ante la aprobación de la Ley que proscribía, penalizaba y castiga a miembros de las maras y las pandillas y a sus colaboradores, dichas organizaciones llamaron al paro del Transporte, logrando sus objetivos. En el contexto del paro, miembros de las Maras y de las Pandillas difundieron comunicados en donde exigían al gobierno la derogatoria de la Ley e incluían otras demandas en beneficio de las mayorías, lo que fue una sorpresa para la mayoría de la población. Dicha ley también fue rechazada por el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) por considerar que "… esta vulnera los Derechos Humanos que legítimamente corresponden y dado que esta forma



parte de un serie de condiciones que el Estado burgués salvadoreño va creando para un momento determinado aplicarla en contra del pueblo salvadoreño y sus organizaciones…" y debido a que esta Ley no ataca el problema de raíz y porque es igual a las políticas dictadas por los gobiernos areneros.

Ya para el 2012 se rompió el hermetismo del proceso de diálogo entre los miembros de la Mara MS 13 y la Pandilla 18. En los momentos en que dicho proceso se hizo público se hablaba ya de una tregua entre ambas estructuras, pero se negaba que existiera una negociación entre ellos y el gobierno. Se reconoció la existencia de dicha tregua mediante un comunicado conjunto en el cual manifestaban "LOS VOCEROS NACIONALES DE LA MARA SALVATRUCHA MSX3 Y LA PANDILLA XVIII al pueblo salvadoreño hacemos saber:.2...desde el año anterior hemos iniciado internamente un profundo proceso de reflexión y análisis sobre los graves y acuciantes problemas que enfrenta nuestro país, de los cuales nosotros hemos sido parte, como consecuencia de la guerra que nos hemos visto obligados a librar por causas sociales de exclusión, marginación, represión y de sobrevivencia. Las reflexiones en mención nos han llevado a las siguientes conclusiones: a) Que si somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. b. que no deseamos seguir haciendo la guerra ni mucho menos seguirla profundizándola… 8- Valoramos que el proceso que hemos abierto es histórico y será de mucho beneficio para el país por eso pedimos no lo bloqueen…A los que viven de hacer análisis les invitamos a renovar el esquema con el que analizan nuestro fenómeno, mientras nos sigan analizando solo como fenómeno delincuencial sus análisis serán erróneos y de igual manera sus recomendaciones para resolverlo, es necesario que entiendan de una vez por todas, que somos un fenómeno social y que la guerra que nos hemos visto obligados a librar, tiene causas socioeconómicas y por tanto su solución no solo es legal y de represión sino también con medidas sociales y económicas…El Salvador, 19 de marzo de 2012."

¿Es posible el ir más allá de la tregua?

Muchos sectores se muestran escépticos ante la tregua de la pandilla y la mara, y tratan de deslegitimar y desprestigiar dicho proceso; mientras esto sucede las iglesias evangélicas compiten contra la iglesia católica para ser tomadas en cuenta y ser partícipes del proceso.



La campaña mediática y de deslegitimación que ha lanzado ARENA contra dicho proceso últimamente ha llevado a un enfrentamiento entre el Fiscal General de la República y ministro de la defensa. Esta campaña busca restar votos a sus contendientes, lo que ha obligado a los demás candidatos presidenciales a retirar el apoyo a la tregua.

Respecto a este proceso de pacificación, Miguel Insulza, Secretario General de la OEA a manifestado que la organización de la OEA "apoya de manera inequívoca y firme el trabajo de los municipios libres de violencia, para todo lo necesario, para que ese respaldo político se fortalezca y mantengamos un diálogo permanente con los señores alcaldes" (Diario Co Latino. 27/07/2013). Un proceso similar de pacificación se busca implementar en Honduras.

Al igual que el Acuerdo de Paz entre el FMLN y ARENA, el proceso de pacificación actual pareciera una necesidad para ejecutar los proyectos económicos de la clase dominante y los dictados por el imperialismo, ya que en el Plan de Acción Conjunto 2011-2015, documento elaborado en el marco del Asocio para el crecimiento, consideran como restricciones vinculantes al crecimiento, "la inseguridad y el crimen y la baja productividad en el sector de bienes transables". De esta manera indirectamente estaría mediatizando a las maras y pandillas, quienes han manifestado ser "… un subproducto social de las nefastas políticas socioeconómicas derivadas de los modelos que se han implementado en el salvador desde hace muchos años…".

Capitalismo, causa estructural de la violencia y delincuencia

Toda la población clama por una solución al problema de la violencia y la delincuencia. El gobierno que logre concretizar los planes de pacificación estaría resolviendo transitoriamente el problema generado por las maras y las pandillas, lo que le permitiría acumular capital político y ser partícipe de los proyectos económicos. Pero mientras la situación socioeconómica quedaría igual; por lo tanto los trabajadores, campesinos, y demás sectores populares debemos movilizarnos y luchar contra el estado burgués y el imperialismo.

EL GOBIERNO SE ENDEUDA PARA PAGAR DEUDAS

Por Armando Tezucún

En las últimas semanas, el tema de la emisión de bonos del tesoro destinados al pago de una deuda flotante con empresas constructoras que el Estado arrastra desde hace varios años, ha enfrentado al gobierno con los partidos políticos de oposición y con sectores de la burguesía.

Esta deuda consiste en pagos pendientes de contratos por obras de infraestructura que los gobiernos de Óscar Berger (2004-2007) y Álvaro Colom (2008-2011) firmaron sin que tuvieran un respaldo presupuestario para que fueran cancelados.



Edgar Baltazar Barquín Durán, presidente de la Junta Monetaria del BANGUAT

Durante el gobierno pasado y el actual se hicieron estudios y auditorías para determinar el cumplimiento de las obras por parte de las empresas, depurando la deuda. A finales de 2012 el gobierno de Pérez Molina reconoció la obligación de cancelar Q 3,500 millones. Sin embargo, el pago no fue incluido en el presupuesto de este año, por lo que se debe solicitar al Congreso la aprobación de los bonos para cumplir con la deuda.

La necesidad de un nuevo endeudamiento llega en mal momento. El gobierno está atravesando una aguda crisis fiscal; la recaudación de impuestos durante el primer semestre se situó aproximadamente Q 1,400 millones por debajo de lo esperado por la Superintendencia de Administración Tributaria. A esto se suma que el Congreso no ha aprobado dos préstamos por Q 3,500 millones que estaban contemplados en el presupuesto, lo que está provocando un hoy fiscal considerable.

Pese a todo, el 5 de julio el Ministerio de Finanzas envió a la Secretaría de la Junta Monetaria la solicitud para que emitiera una opinión sobre la emisión de Q 3,445 millones en bonos del tesoro destinado al pago de las obras mencionadas.

Las organizaciones de la burguesía tuvieron opiniones encontradas. Las cámaras de Comercio, Industria y la del Agro manifestaron su oposición a la emisión de bonos, argumentando que no es correcto emitir deuda para pagar otra deuda y que se incrementará la deuda pública del país. La Cámara de la Construcción, cuyos asociados han esperado ya varios años que se les pague lo adeudado, lógicamente se pronunció a favor. El comité que coordina todas las cámaras empresariales, el Cacif, tuvo una postura conciliadora, afirmando que el Estado debe pagar toda deuda con las empresas que hayan sido auditadas y hayan cumplido, pero sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país, y que los pagos deben ser transparentes y fiscalizados (Prensa Libre 10/07/13).

El 10 de julio la Junta Monetaria emitió una opinión favorable a la emisión de los bonos. Pero la decisión, de acuerdo al presidente del Banco de Guatemala Edgar Barquín, fue solamente en cuanto a los aspectos monetarios, y fue condicionada a que el Congreso no puede aprobar más deuda si el ejecutivo no contiene el gasto, y que si los bonos se utilizan para pagar deuda, ésta debe tener el respaldo legal. Barquín aseguró que según la propuesta que envió el Ministerio de Finanzas a la Junta Monetaria, los bonos servirían para inversión pública y no para el pago de deuda, que dependía del congreso el destino que se daría a los fondos.

En este punto los funcionarios del gobierno empezaron a contradecirse. Mientras el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, anunció que la totalidad de los bonos serviría para pagar la deuda flotante argumentando que es un compromiso de Estado, el presidente Pérez Molina declaró que sólo se destinarían Q 2,000 millones al pago de dicha deuda, y que el resto servirá para obras de infraestructura rural programadas por los alcaldes.

El gobierno tiene aún que resolver la parte más difícil: que el Congreso apruebe la emisión de bonos. El partido Patriota necesita reunir 105 votos para interrumpir la eterna interpelación al ministro de cultura que llevan a cabo diputados de Lider, para que se puedan votar las Leyes de Transparencia y después los bonos. La última sesión del Congreso del 25 de julio fue un fracaso para la bancada oficial en este sentido.

Si los bonos son aprobados, la deuda interna y externa del país llegaría a Q 107,173 millones, el 27% del Producto Interno Bruto. Los funcionarios de finanzas prometen hacer malabares para ajustar el presupuesto y los gastos. Es a todas luces muy aventurado e irresponsable asumir nuevo endeudamiento en momentos de grave crisis fiscal del gobierno y de estancamiento de la economía. Creemos que el gobierno debe desconocer a deuda flotante con los empresarios de la construcción, que muchos analistas opinan que es ilegal. Reiteramos una vez más que para solucionar su problema fiscal el gobierno debe eliminar las exoneraciones y privilegios que gozan muchas empresas, incrementar las regalías a las empresas mineras y aplicar impuestos directos a las ganancias de los empresarios. El capitalismo es el causante de la actual crisis, que los capitalistas la paguen.



EL EJEMPLO DE LOS TRABAJADORES DE LA COMUNA DE JALAPA

Por Leandro Flores

Aun con tantos convenios de la OTI, la Constitución de la República, los pactos colectivos y el mismo Código de Trabajo, se violan en Guatemala los derechos laborales fundamentales de cualquier trabajador del sector privado o público. En la comuna de Jalapa pareciera ser que el alcalde Elmer Leónidas Guerra Calderón pisotea a todos los trabajadores con una gran insensibilidad, pero en esta ocasión la victoria fue para los trabajadores.

Todo ocurrió al inicio de la nueva administración, porque como se sabe, para llegar a ser alcalde de algún municipio en este sistema electoral burgués, no se necesita ser democrático, sino solo tener el dinero para financiar la millonaria propaganda. Con esto muchos alcaldes se ponen la soga en el cuello para conseguir el dinero, y a la hora de conseguir el "hueso", ellos deben de pagar, con trafico de influencias, el favor a quien les proporciono el dinero (muchas veces dinero lumpen). El caso es que entre el 30 de abril al 4 de mayo del 2012 el alcalde despidió a 216 trabajadoras y trabajadores de forma injusta con la irónica justificación de que la comuna no habían fondos para pagar los sueldos.

Ante la actitud negativa de alcalde, el juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Prevención Social de este departamento ordenó en abril de 2012 la reinstalación de 150 de los más de 200 trabajadores que fueron despedidos por el alcalde municipal, por lo que los oficiales de dicho juzgado se hicieron presentes a la Municipalidad de Jalapa para notificar sobre dicha orden judicial. El alcalde no acató las órdenes, pasando por encima de las pocas leyes que benefician a los trabajadores.

Para calmar los ánimos de la gente, la propuesta del Alcalde, avalada por el Ministerio de Trabajo era reinstalar únicamente a los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo y un pequeño grupo adicional de compañeros; lamentablemente el sindicato de reciente creación y minoritario aceptó tal determinación sin pensar en la colectividad y la necesidad de todos los trabajadores despedidos y sin tomar en cuenta que esto es o será bien aprovechado por el gobierno presidido por el presidente Tito Arias (Pérez Molina), para justificar que se ha resuelto o se está resolviendo el conflicto.

Por medio de una carta dirigida al ministro de trabajo, en noviembre de 2012 la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala CUSG, miembros activos del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco; y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa SITRAMJ afiliado a CUSG, logró que todos los trabajadores fueran recontratados, pero el problema no terminó aquí.



Empleados municipales de Jalapa muestran nota de reinstalación

En julio de este año, el alcalde suspendió a 151 trabajadores por seis meses sin goce de sueldo. En esta ocasión en Ministerio de Trabajo se puso del lado del edil, con la misma irónica justificación de que "no hay dinero"; en las notas giradas por el alcalde a los trabajadores se lee que por medio de la resolución D-IGT-556-2013-JAAH-crgl, se declaró con lugar la solicitud de suspensión laboral colectiva total de contratos de trabajo. "Queda suspendida sin responsabilidad para ninguna de las partes a partir de la presente fecha", se lee en el texto (Prensa Libre 12/07/13).

Delmi Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Solidarios de la comuna, indicó que se presentaron acciones legales por medio de una denuncia en contra del alcalde Élmer Guerra, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, y esperan que el Ministerio Público haga su trabajo, y le dé seguimiento a la querella, que también fue presentada contra el inspector general de trabajo Juan Arbizú Hernández, quien giró la orden.

Después de que el jueves 11 se suspendieran a los trabajadores, el lunes 15 los trabajadores recibieron la carta en la que el Ministerio de Trabajo (Mintrab) y Previsión Social ordenó que los 151 empleados de la Municipalidad de la cabecera de Jalapa se presentaran normalmente a sus labores el lunes, luego de que se revocara la orden D-IGT-556-2013-JAAH-crgl.

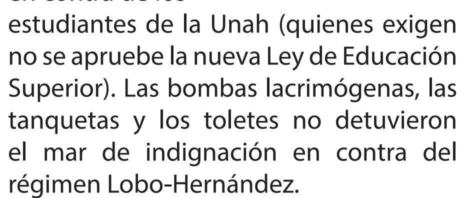
Desde el Partido Socialista Centro Americano PSOCA, les saludamos y felicitamos a los trabajadores de la comuna y que no se dejen intimidar lo el alcalde, esto es un claro ejemplo que las luchas siguen. Les aconsejamos que soliciten un antejuicio contra el alcalde Guerra, para procesarlo por sus ataques a los trabajadores, y que no confíen en el Ministerio del Trabajo, que en última instancia favorece a los patronos.

JORNADA DE LUCHAS: LA ESPERANZA NO HA MUERTO

Por Sebastián Ernesto González



El día jueves 25 de julio volvió a surgir en diversos sectores el deseo de luchar en las calles. Los protestantes, indignados, hicieron caso omiso a la represión desatada los días martes y miércoles de la misma semana, en contra de los estudiantes de la Unah (quienes exigen no se apruebe la nueva Ley de Educación Superior). Las bombas lacrimógenas, las tanquetas y los toletes no detuvieron el mar de indignación en contra del régimen Lobo-Hernández.



Los trabajadores de Hondutel salen a exigir más presupuesto

El sindicato de Hondutel ha venido realizando desde hace unas semanas una lucha en contra del intento de Lobo-Hernandez por privatizar la empresa. Hasta ahora, el régimen no ha encontrado un socio estratégico que esté dispuesto a invertir a cambio de menos del 50% de acciones.

El sindicato exige inmediatamente una línea de crédito de 80 millones de lempiras para estabilizar la empresa a corto plazo (LT 26/07/2013); con la movilización del jueves le arrancaron la promesa al Vice presidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, de que la próxima semana les hará una contra propuesta.

Estudiantes de secundaria se suman a la lucha

Estudiantes de la Escuela Normal Mixta "Pedro Nufio" y alumnos del Instituto Técnico Honduras decidieron romper el letargo y salieron a exigir el pago del "bono del transporte" y la "matrícula gratis".

El gobierno ha dejado de pagar estos programas a consecuencia del enorme déficit fiscal que agranda la severa crisis económica del país. Los estudiantes de la Normal Mixta exigen que no se cierren las escuelas normales, ya que si las cierran se deja excluidos a todos aquellos jóvenes que carecen de oportunidades para estudiar en la universidad.

Estudiantes universitarios con una semana de lucha

Un fuerte grupo de estudiantes universitarios organizados en el Movimiento Amplio Universitario (MAU), ha desarrollado en esta semana 3 días de protesta en contra de las pretensiones del Congreso Nacional de aprobar la nueva Ley de Educación Superior, según la cual el presupuesto asignado, que es el 6 % del presupuesto nacional, estaría siendo utilizado por 20 universidades del país (2 públicas y 18 privadas).

Muchas de estas universidades son más bien de "maletín", ya que carecen de infraestructura física adecuada para cumplir el papel pedagógico de una Universidad. Los días martes y miércoles los muchachos fueron reprimidos por la policía nacional, pero esto no amilanó a los estudiantes, quienes se sumaron el jueves a la jornada de movilización.

Farsa de Marlon Escoto con "evaluaciones"

Es curioso, el motivo por el cual el magisterio salió nuevamente a las calles en gran número no fue una pérdida económica, fue la indignación de verse humillado con las maquiavélicas intenciones de Marlon Escoto de publicitar a los docentes con un bajo nivel académico. Obviamente, el objetivo del títere de la oligarquía es bajarle el perfil a los docentes para hacerlos ver como incompetentes. Las tales pruebas aplicadas presentaban una gran cantidad de ítems dignos de estudiantes de matemática, ingeniería o economía; otra gran cantidad estaban mal redactados o presentaban preguntas ambiguas y en el peor de los casos, el sistema por internet no funcionaba. El malestar de los docentes no se hizo esperar, y la presión se dejó sentir a través de la denuncia de la gran farsa por los todos los medios de comunicación posibles.

Aglutinar las luchas y retomar la ruta para enfrentar al régimen

Un acierto de la dirigencia en esta ocasión fue la de despolitizar la jornada de lucha, pero esto no basta. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a todos los sectores en lucha para planificar una estrategia que enfrente al régimen Lobo-Hernández.

EL CLIMA POLÍTICO EN LA UNAH ANTE LA REELECCIÓN DE LA RECTORA

Por Maximiliano Fuentes

Las presiones políticas de Julieta Castellanos ante la virtual reelección son varias. Hasta hace un mes parecía ir viento en popa hacia su reelección por un nuevo periodo, pero aún cuando todo se encaminaba hacia su favor, las contradicciones han empezado a empañar su gestión. Es difícil cuestionar la gestión de Julieta Castellanos en la UNAH, dado que previo a su llegada, la institución se comportaba de la misma manera que las otras instituciones del Estado y se caracterizaba por una mala gestión administrativa y académica y la enorme corrupción de diferentes agentes. Los paulatinos y progresivos cambios emprendidos por su administración se realizaron suprimiendo la participación de los estudiantes y trabajadores de los organismos de gobierno y una enorme concentración del poder central.



La eliminación de la democracia interna y la centralización de poderes le ha permitido a la Sra. Rectora realizar una serie de acciones sin oposición alguna. En algunos casos, sus decisiones han sido acertadas, y evidentemente en otras han contribuido en acentuar su mandato a favor de los intereses del Estado, poniendo en detrimento las conquistas laborales, la estabilidad laboral y el derecho de huelga. Prueba de lo anterior ha sido su política de no dar ningún tipo de incremento sobre la base salarial, dejando en el vacío el 5.4% de costo de vida y el de indexación salarial.

Las reformas realizadas a la Ley Orgánica le dan amplios poderes y contemplan la reelección, que no estaba incluida; para lograr este cambio debió negociar con la bancada nacionalista, concretamente con su representante, el presidenciable Juan Orlando Hernández.

Las reformas a la Ley de Educación Superior

Si hay algo que muy bien ha caracterizado al gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, ha sido el haber gobernado en función de las grandes empresas y corporaciones. La mayoría de las leyes aprobadas se dirigen a otorgar nuevos espacios de explotación y de control de la soberanía nacional bajo las leyes de la libre empresa. Un ejemplo claro de lo anterior es la jurisdicción de las ciudades modelos. Así mismo, se orientan a trasladar la enorme crisis económica, el déficit fiscal y el gasto público al pueblo trabajador. Su política económica ha consistido en el debilitamiento de la institucionalidad que proporciona el cumplimiento de las distintas demandas sociales. Por ejemplo, se ha reducido el presupuesto a salud, cultura y no se pretende incrementar el presupuesto en materia educativa. Al contrario, el magisterio nacional ha venido siendo objeto de una política que ha logrado asestar duros golpes a los bolsillos de los docentes y sus enormes conquistas sociales.

Por otro lado, los empresarios vinculados al gobierno se han visto favorecidos por la política demoledora de lo público. En ese marco, fueron impulsadas las reformas de la educación superior, cuya orientación es eliminar el control que ejerce el Estado en materia de educación. De esa manera, se podrán abrir carreras y universidades sin control de restricción, dado que las Universidades poseerán absoluta independencia política y económica. De la misma manera, se pretende crear un ente independiente con fondos mixtos quien será el responsable de organizar y supervisar las políticas y acciones educativas a nivel superior.

Las protestas estudiantiles

Ante el debilitamiento de la ADUNAH y del SITRAUNAH, son los estudiantes los que han empezado a alertar a la comunidad universitaria del inminente peligro de la pérdida de la autonomía y de la amenaza latente del debilitamiento de la escuela pública. En ese sentido, durante la semana del 22 al 27 de julio, se dieron una serie de enfrentamientos entre la policía y un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que protestaban contra la propuesta de reforma de ley presentada por las autoridades universitarias, incluida la Sra. Rectora Julieta Castellanos, ante el Congreso Nacional. De igual manera, los estudiantes conscientes de su papel histórico se movilizaron con estudiantes de secundaria para frenar la tentativa de ley que pretende eliminar la autonomía y el papel de rectora de la educación superior a la UNAH.

Es por lo anterior que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los trabajadores universitarios, docentes y estudiantes a conformar un bloque de defensa de la autonomía y de la educación pública. Solo la organización de estos sectores bajo un programa de lucha podrá frenar las intenciones del gobierno y de la cúpula empresarial que pretende incrementar sus ganancias dejando a un lado el enorme derecho de los trabajadores de recibir una educación pública, científica, gratuita y de calidad.

EL PAPA EN BRASIL ESTRENA NUEVO DISCURSO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Por Leonardo Ixim

Desde el día 25 de junio el Papa Francisco, de nacionalidad argentina y primer Papa latinoamericano, visita Brasil para presidir la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Este evento es organizado por la jerarquía de la Iglesia católica desde 1985, y fue creado por Juan Pablo II en el contexto de la caída del socialismo burocrático ex estalinista y el papel que jugó en Polonia

Rebelión juvenil contra el neoliberalismo social

La JMJ se realiza en el marco de grandes movilizaciones, que no se registraban desde que se expulsó de la presidencia a Collor de Melo en 1992. Semanas antes de la visita del Papa a la ciudad de Rio de Janeiro, epicentro de las actividades papales, se habían dado fuertes movilizaciones contra el gobernador estadual Sergio Cabral del opositor partido PSDB, que exigían mayor inversión en salud, educación, trabajo, etc.

En Brasil se han dado movilizaciones en contra de la partidocracia de la que hacen parte desde el opositor PSDB hasta el oficialista PT y sus aliados; recordemos también que durante 11 años de gobiernos petistas la política económica se ha caracterizado por implementar un neoliberalismo con ciertas políticas sociales.

Las jornadas de junio, cuya chispa fue el aumento del pasaje, a la que rápidamente fueron incorporadas otras demandas relacionados a los altos costos de eventos deportivos y la falta de derechos sociales de la población, tuvo como protagonista a la juventud, primero estudiantes, después jóvenes de las favelas. Además se incorporó la clase obrera, primero inorgánicamente y después con un paro general convocado por las principales centrales sindicales como Conlutas y otras.

Ante esta situación la respuesta del gobierno federal fue errática: primero una convocatoria a una constituyente, que fue rápidamente desmentida ante la oposición de la partidocracia entre ellas el PT y después una serie de diálogos con distintos actores políticos entre ellos los movimientos sociales. También recordemos que hubo intentos de la derecha y de los medios controlados por el capital financiero de sacar beneficio de tales movilizaciones.

Protestas ante la llegada del Papa

La JMJ busca desmovilizar a la juventud en lucha; pese a esto, desde la llegada del Papa se han dado fuertes manifestaciones, enfrentamientos con la policía con el saldo de más de seis heridos, destrucción de bancos y sedes de grandes empresas, etc. Así mientras el Papa celebraba el día 25 de julio con una multitud de jóvenes católicos en las playas de Copacabana, en otras partes de la ciudad, otros segmentos de la juventud protestaban contra la militarización por la presencia del Papa y por los gastos excesivos, que si bien no todos corrieron a cuenta del erario público, una gran parte estuvo a cargo de los monopolios que gastaron plata a cambios de beneficios fiscales. Muchos de los manifestantes cuestionaban bajo la consigna "no queremos Papa, sino queremos dinero para educación y salud", ante la presencia del pontífice.

Durante estas manifestaciones la policía militar censuró y persiguió a los miembros del medio independiente Ninja, acusándolos de instigar a la violencia; esta organización en los últimos días ha trasmitido la información sobre las movilizaciones. Además también se han dado movilizaciones en Sao Paulo, aunque no tan numerosas como las de Rio de Janeiro. En ambas metrópolis quien que ha estado a la vanguardia de las manifestaciones recientes ha sido la organización anarquista Bloque Negro, el cual es más una red a nivel mundial que se identifica con este proyecto político. El día 26 la policía reprimió con fuerza a una manifestación de esta organización que buscaba acercase a Copacabana, pese que ya no había actividades religiosas en tal lugar.

De igual manera se han dado manifestaciones de organizaciones de mujeres en contra de las posturas de la Iglesia en materia de derechos sexuales, a favor del derecho al aborto, a la salud sexual y reproductiva. También organizaciones de la diversidad LBGT, han protagonizado marchas y concentraciones por la postura homofóbica de la Iglesia. Organizaciones de ateos, una población que crece cada día más en toda la América Latina, realizaron actos simbólicos de desbautizarse en varios puntos de Rio de Janeiro.

Y el sábado 27 nuevamente en Copacabana al cierre de esta edición, se realiza una concentración en el marco de la internacional "marcha de las putas", efectuada por organizaciones de mujeres, que desde el campo de la semiótica buscan reapropiarse de ese concepto minusvalidado por la cultura machista por medio de marchas vistosas donde la féminas salen con atuendos moralmente no aceptados.

Sobre este apartado le corresponderá a las grandes centrales sindicales, a los movimientos de base, a las distintas organizaciones populares, convocar a una jornada de luchas en los meses siguientes para evitar que el movimiento se desvíe en los intentos institucionalistas burgueses tanto del PT como de la oposición.

¿A cuál juventud se refiere el Papa?

Sostenemos que la política de la jerarquía católica es disputar a la juventud para el proyecto reaccionario de mantenimiento de status quo y, pese a la personalidad carismática de este Papa, este hombre vinculado a la partidocracia corrupta argentina y cuestionado por su papel pasivo con respecto de la dictadura militar en ese país, es pieza fundamental de tal proyecto.

A nivel mundial, especialmente en Europa, las tasas de desempleo o de empleo precario de la juventud van en aumento; ni siquiera los programas asistenciales de los gobiernos "progresistas del sur" han podido detener tales tendencias. Sin embargo es en la Europa neoliberal agobiada cada vez por una deuda impagable y los efectos de las políticas económicas de austeridad donde este fenómeno es más crudo.

Según la Organización Internacional del Trabajo, en su informe "Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2013", las tasas de desempleo, empleo parcial y mal pagado sobre todo en países



industrializados es cada vez mayor, aunque a nivel latinoamericano no son despreciables las cifras. De igual forma, cada vez aumenta más el número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan sobre todo en el norte industrializado.

En toda la región el desempleo entre jóvenes de 18 a 24 años aumenta cada año. El acceso a la salud y educación, aunque más acentuado en los gobiernos claramente neoliberales, pese a contar con una gran cantidad de programas auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo que han mejorado levemente el acceso a estos servicios, sigue siendo desigual. Situaciones como atención materno-infantil, interrupción segura del embarazo a mujeres jóvenes pobres, deserción escolar, analfabetismo funcional, pues la tasa de analfabetismo se ha reducido en la región, sigue en aumento.

La violencia y la criminalidad siguen afectando a la juventud. En países como Brasil la población negra sufre más claramente la violencia. En Centroamérica, sobre todo en los países del triángulo norte, la juventud es la víctima y el principal victimario de la delincuencia. Por tanto estas dos variables, sintéticamente nos aclaran que es la violencia estructural propia del sistema capitalista la causante de este genocidio a la juventud.



El Papa Francisco y la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff

El Evangelio Social y los olvidados pobres

Con el nombramiento de Bergoglio a la cabeza de la Iglesia Católica romana, la jerarquía eclesiástica busca darse un respiro ante la crisis que vive la institución. Y no es extraño que la Iglesia mire hacia Latinoamérica, donde está el mayor número de feligreses de todo el orbe. Brasil es el país con más católicos del mundo, pero a la vez es donde el protestantismo especialmente las sectas procedentes del Norteamérica han crecido. No es extraño tampoco que el Papa haya ido al Santuario de Apericida, donde a inicios de los 90s los obispos latinoamericanos aglutinados en la Celam, concibieron una estrategia para no perder feligresías ante la embestida protestante, manteniendo algunos elementos de la golpeada Teología de la liberación (TL), afectada seriamente por los ataques de Juan Pablo II y la Congregación de la Fe (CF).

La Iglesia católica hoy sufre, después de más de 1500 años de existencia, una crisis profunda que se revela por ejemplo en la denuncia sobre abusos sexuales a niños de parte de curas y párrocos, en los casos de corrupción registrados en el Banco de Vaticano, un poderoso monopolio financiero vinculado al crimen organizado o en las intrigas relacionadas al poder de la CF, agrupación que representa las tendencias más reaccionarias dentro de la Iglesia y en si con toda la estructura despótica de la última monarquía absoluta de occidente.

En ese sentido Francisco representa una supuesta postura centrista que se pone de manifestó en sus ataques contra "los teólogos ilustrados que están lejos de la gente", es decir contra personalidades tanto de la CF como de la TL. Además su personalidad anti-protocolaria y su acercamiento constante hacia la gente, refuerzan la imagen de un posible cambio de rumbo en muchos aspectos de la Iglesia.

Sin embargo, desde punto de vista del materialismo militante, tanto la postura más social católica o la más individualista del protestantismo, son conservadores; por ejemplo la postura del Papa relacionada a su negativa a legalizar las drogas como forma de combate al narcotráfico, la prohibición del aborto, la eutanasia, etc., su ataque velado ante los avances de la ciencia. Y en última instancia, hay algunos sectores progresistas del seno de ambas religiones que ponen en duda que sea necesario eliminar la propiedad privada de los medios de producción.

Por tanto nos toca combatir desde la izquierda revolucionaria en todo el continente, respetando la creencia de todos los compañeros sobre todo los que se aglutinan en organizaciones de base de la Iglesia y que son protagonistas de distintas luchas, que el evangelio social, por más que predica a favor de los pobres, no se acerca ni a la mitad de lo que fue la TL, pues se queda en puro asistencialismo; esta misma teología por su parte, implicó, debido al mismo aporte y presencia en el movimiento revolucionario en Centroamérica, un giro de éste hacia posturas reformistas en los 80s.

Debemos ser claros con algunos compañeros que creen que el Papa iniciará un proceso de democratización interna de la Iglesia. Debemos debatir también la idea de que a partir de Francisco el catolicismo se abrirá a las tendencias actuales en la juventud, a no ser que eso implique el rompimiento de grupos tal como hay en Brasil y otros partes, con Roma.

Por nuestra parte nos corresponde coordinar a nivel internacional una jornada de luchas de toda la clase proletaria mundial contra los efectos del capitalismo.



19 DE JULIO 1979:

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL TRIUNFO DE LA INSURRECCIÓN POPULAR CONTRA SOMOZA

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El triunfo de la insurrección popular en 1979 ha sido descrito por los historiadores sandinistas como la culminación de una larga lucha guerrillera, pero esta afirmación dista mucho de reflejar lo que realmente ocurrió.

Como cualquier triunfo revolucionario de las masas, fue producto de una combinación de factores nacionales e internacionales, extremadamente favorables, que confluyeron en un momento determinado.

Milicianos en una barricada

Crisis económica, pugnas interburguesas y radicalización de la clase media

El régimen somocista ha sido, por décadas, el sistema político que más beneficios económicos le ha producido a las diferentes alas de la burguesía nicaragüense, hasta el terremoto de Diciembre de 1972. La reconstrucción de Managua era un jugoso negocio que despertaba la codicia de todos los empresarios. Somoza rompió los acuerdos y comenzó a invadir, desde el Estado, las áreas económicas que habían sido acordadas desde el "Pacto de los Generales" Somoza-Chamorro en 1950, provocando un conflicto inter burgués de grandes proporciones.

La burguesía reclamaba a Somoza que hacía "competencia desleal". En este contexto de crisis económica y conflicto inter burgués, alas radicalizadas de la clase media giraron hacia la izquierda y confluyeron con las diversas tendencias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fortaleciendo al conjunto de la organización guerrillera que era vista por las masas como luchadora consecuente contra el somocismo.

La brutal represión del somocismo y la ausencia de libertades para desarrollar la lucha política, polarizaron rápidamente a la sociedad nicaragüense y la guerrilla urbana se convirtió en un método de lucha de las masas. Sectores de la burguesía, decepcionados por la incapacidad del somocismo de promover una reforma política, comenzaron a apoyar decididamente al FSLN.

Contexto internacional favorable

Después de la derrota militar en Vietnam en 1975, el imperialismo norteamericano se reacomodó con una estrategia defensiva que promovía la democracia y la defensa de los "derechos humanos" en el mundo. Esta política fue impulsada bajo la administración del presidente Jimmy Carter (1977-1981) y tuvo especiales consecuencias en Nicaragua y Centroamérica: para evitar estallidos revolucionarios, Estados Unidos dejó de ser el tradicional protector de la dictadura somocista y de muchas otras dictaduras de América Latina.

Pero en el caso de Nicaragua, la estrategia del imperialismo llegó tarde porque el somocismo se resistió al más mínimo cambio y por ello no pudo frenar el ascenso de masas. Los acontecimientos en Nicaragua preocuparon a la burguesía regional.

Con una política de alianzas con los empresarios, el FSLN obtuvo, en el periodo 1978-1979, el apoyo financiero, militar y diplomático del General Omar Torrijos, del presidente de Panamá, de Rodrigo Carazo Odio, presidente de Costa Rica, de Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela y de José López Portillo, Presidente de México. La Internacional Socialista (IS) también apoyo decididamente al FSLN en su lucha contra Somoza.

Pero este apoyo no fue desinteresado. Cada gobernante apoyó la lucha contra Somoza por la defensa de sus propios intereses. El General Omar Torrijos, por ejemplo, estaba negociando con la administración Carter la devolución del Canal de Panamá, y no quería que los Estados Unidos, a partir de la derogación del tratado Chamorro-Bryan en 1974, fijasen sus ojos nuevamente en Nicaragua para construir un nuevo canal interoceánico, que podría desplazar al obsoleto canal de Panamá.

De la misma forma, la crisis de la economía costarricense en el periodo 1974-1975, muy vinculada a la nicaragüense, estaba sufriendo los estragos de la inestabilidad política y la lucha revolucionaria, que amenazaba extenderse a toda el área centroamericana. México tenía un interés muy particular: después del terremoto de 1972, el negocio de la reconstrucción de Managua pareció quedar en manos de las compañías



mexicanas, pero la voracidad de la dictadura somocista provocó roces no solo con los empresarios mexicanos sino con la oligarquía conservadora, que comenzó a rebelarse.

Los intereses de Carlos Andrés Pérez no eran tanto económicos como políticos: aspiraba a que la Internacional Socialista influyera en los procesos políticos en América Latina. Contrario a lo que se puede creer, el apoyo de Cuba fue limitado y discreto en relación a las fuerzas políticas descritas anteriormente, aunque fue vital durante la insurrección en 1979.

En resumen, esta amplia alianza de fuerzas políticas a nivel internacional fueron determinantes en el triunfo popular sobre la dictadura somocista en 1979. El punto culminante de esta alianza internacional fue la Resolución de la OEA, del 23 de Junio de 1979, que ordenaba "a) El reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista; b) Instalación en el territorio de Nicaragua de un gobierno democrático cuya composición incluya los principales grupos representativos opositores al régimen de Somoza y que refleja la libre voluntad del pueblo de Nicaragua; c) Garantía de respeto de los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin excepción; d) Realización de libres elecciones a la brevedad posible que conduzcan al establecimiento de un gobierno auténticamente democrático que garantice la paz, la libertad y la justicia".

¿Lucha guerrillera o insurrección popular?

A nivel interno, a partir de los espectaculares ataques militares en Octubre de 1977, y del surgimiento del "Grupo de los Doce", sectores de la burguesía opositora y de la clase media proporcionaron todo tipo de apoyo político y logístico a la guerrilla del FSLN. Evidentemente, el rol decisivo lo jugaron las masas populares que salieron a la calles a combatir a la Guardia Nacional (GN), especialmente después del asesinato del líder opositor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Enero de 1978. En ese período el puñado de guerrilleros sandinistas que habían sobrevivido a la violenta represión desatada por la GN, se convirtió en una poderosa fuerza política y militar, capaz de encabezar la lucha a muerte contra la dictadura somocista.

El mito de la guerrilla rural que acumuló fuerzas lenta y gradualmente, y se abastecía por su propia cuenta, hasta tomar por asalto las ciudades, debe ser desechado porque no corresponde a la verdad de la historia.

El general retirado Humberto Ortega Saavedra, principal estratega militar del sandinismo, reconoció el vital apoyo financiero y militar de la burguesía latinoamericana en la lucha del FSLN contra Somoza, al escribir que "(…) el caudillo costarricense José Figueres Ferrer en 1978 nos entregó un lote importante de armas. El otro aporte bélico más moderno lo entregó el Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. También el general Torrijos nos proporcionó armas (…) A inicio de 1979, el Presidente Venezolano nos manifiesta que ni él ni el General Torrijos pueden suministrarnos más ayuda militar, y seguidamente le solicita a su homólogo cubano que nos proporcione armamento, a lo que Fidel responde afirmativamente (…) desde 1978, los Terceristas venimos obteniendo apoyo financiero que proviene particularmente de Venezuela a través de su Presidente, quien nos proporciona más de un millón de dólares (…) Del general Omar Torrijos recibimos 100 mil dólares mensualmente, también el Presidente López Portillo realizó aportes (…) en pleno desarrollo de la ofensiva final manejé varios millones de dólares que eran resguardados en sacos de lona, y se emplearon de una manera veloz para sostener los ritmos ofensivos que la insurrección demandaba (…)". (La Epopeya de la Insurrección)



19 de Julio: El triunfo de la insurrección popular

Con el triunfo de la insurrección popular, el 19 de Julio de 1979, las masas trabajadoras derribaron a la dictadura, desmantelaron la columna vertebral del Estado burgués: la Guardia Nacional (GN) de Somoza, el aparato represivo que la intervención militar norteamericana había instalado en el poder, a raíz del asesinato del General Augusto César Sandino y del aplastamiento de las guerrillas nacionalistas y antiimperialistas en 1934.

La entrada triunfal de las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a Managua, el 19 de Julio de 1979, fue la culminación victoriosa de una corta pero sangrienta guerra civil.

Al derrumbarse el Estado por el empuje de la revolución, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) liquidó el Congreso Nacional, derogó la Constitución de 1974 y proclamó el "Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional", el 20 de Julio de 1979, disolviendo "la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Tribunal Superior del Trabajo y demás estructuras de poder somocista"; se declararon "especialmente inaplicables todas las disposiciones que se refieren al partido de la minoría en cualquier otra ley vigente". Este "Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional" fungió como Constitución provisional.



Situación revolucionaria en Centroamérica

La situación revolucionaria en Nicaragua se extendió y generalizó a toda el área centroamericana, aunque con ritmos desiguales y contradictorios en cada país.

A pocas semanas de la victoria revolucionarla del 19 de Julio de 1979 cayó la dictadura del General Romero, en El Salvador, producto del poderoso ascenso obrero y popular, siendo sustituida por el igualmente frágil y efímero gobierno "cívico-militar" del Coronel Majano. En Guatemala, a pesar del heroísmo desplegado por la guerrilla, esta no logró convertirse en un peligro militar para la dictadura de los generales. Nicaragua y El Salvador se transformaron en los picos más altos de la revolución centroamericana.

La revolución nicaragüense planteó la posibilidad real de liberar a Centroamérica de la dominación imperialista y realizar la tarea democrática inconclusa que las burguesías se negaron a realizar: la reunificación de la nación centroamericana un solo Estado.

TRABAJADORES DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN MAYCO

Por Adrián Laurel

"MAYCO intervenida Es una "huaca" dentro de la gran "huaca" de defraudadores, malversadores y lavadores de dinero del Estado". Era el título de la noticia aparecida en el Nuevo Diario el 12 de agosto del 2002. Esta nota periodística recogía las denuncias hechas por los trabajadores de la empresa Materiales y Construcción S.A. Mayco contra el antiguo gerente Sebastián Martínez, el ex presidente Arnoldo Alemán y otros funcionarios su administración, en la que les acusaban de saquear la empresa por medio de diversas operaciones fraudulentas con la finalidad de enriquecer sus bienes personales.

Trece años después, bajo un nuevo gobierno, ahora de "izquierdas", nos encontramos ante un acontecimiento que difiere muy poco del descrito anteriormente. Los trabajadores de la fábrica de adoquines denuncian a la administración Orteguista de llevarles a la ruina, dando cuenta de varias irregularidades que implican al gerente actual, José francisco López, y sus allegados, quien funge dentro del FSLN como tesorero, además de ser vicepresidente de la junta directiva de Albanisa y presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense del Petróleo Petronic.



La fábrica de adoquines Mayco, inscrita como una constructora en 1996, funcionó como una empresa estatal hasta el año 2001, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua promulgó una ley que autorizó su privatización. Aparentemente se autorizaba, entre otras cosas, que a favor de los trabajadores se traspasaban los bienes, acciones y derechos del Estado, evidentemente con un monto de pago de éstos para con el Estado; sin embargo muchas fueron las voces que en su momento denunciaron dicha privatización como un mecanismo del gobierno de Alemán para ocultar anomalías dentro la fábrica que le vinculaban a él y su cúpula, con varias irregularidades internas.

¿Dirigentes del FSLN tras el fraude financiero?

En esta ocasión, el caso de corrupción que salpica a la empresa constructora radica en que "mediante una serie de situaciones que los trabajadores califican de "fraudulentas", el tesorero del FSLN, Francisco López, constituyó otra empresa a partir de Mayco y ahora este, supuestamente, quiere quebrarla para absorberla totalmente" (La Prensa 16/)07/13); López trasladó el 35% de las acciones a la empresa Tecnologías y Sistemas SA TECNOSA, propiedad suya, lo que dio origen a, Mayco-Tecnosa, Matecsa. El mecanismo de ahogo económico se aplicó con el objetivo de invalidar las acciones que pertenecen a los trabajadores, para consolidar al FSLN como propietario mayoritario sin tomar en cuenta el consentimiento y beneficio de los obreros.

Dentro de las anomalías e irregularidades sucedidas en la fábrica recientemente, se encuentran: bienes materiales propiedad de Mayco han pasado a manos del consorcio de los López, cuyos intereses económicos responden evidentemente a la cúpula de gobierno del FSLN; un préstamo de 968,199 dólares proveniente de la cooperación venezolana que el ingeniero López autorizó a la sociedad Tectasa, en la que Tecnosa es socia mayoritaria"; fusión con otra sociedad anónima (Tecnosa) propiedad, también, de los hermanos López y una deuda de 7 millones a efecto de la constitución de Matcesa. No conocen los trabajadores la naturaleza de estas operaciones y las encuentran contradictorias ante la rentabilidad de la empresa, explicaba José García, presidente de la junta directiva, haciendo eco del estado de inconformidad latente entre los obreros, aunque luego se retractaría de sus palabras tras llegar a un acuerdo con miembros del FSLN.

La voluntad de los dirigentes no es la voluntad de los obreros

Lo que ha prevalecido oficialmente es el silencio. Ningún representante oficial del gobierno, a nivel legal o económico, se ha dignado a explicar, no solo a los trabajadores, sino a la población general, sobre lo que acontece realmente con la figura de Francisco López, su verdadera labor en el FSLN y su influencia en la ruina financiera de la empresa constructora. José Luis García, luego de dar cuentas sobre las evidentes irregularidades, se retractó de ello y acuso a La Prensa "derechista" de tergiversar la información obtenida con la intención de dañar al gobierno sandinista. Sin embargo, lo que permanece inmutable e imparcial ante la luz pública, es la intención del gobierno de turno de socavar los recursos de esta empresa para consolidar las arcas financieras de la clase dirigente emergente, ante la desorganización política y el estado vulnerable de los obreros, cuyos intereses no son tomados en cuenta cuando los representantes administrativos de la burguesía se dividen entre sí los beneficios económicos y materiales obtenidos a través de la corrupción.



MOVILIZACIONES DE LA UNAM RESTABLECEN LA PENSION REDUCIDA

Por Diego Lynch

Tras seis años de lucha constante y el fallecimiento de algunos de los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), la lucha se tornó más fuerte, hasta el punto que los adultos mayores se vieron en la necesidad de tomarse las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); esto con el fin de que se les pagara el dinero que durante muchos años cotizaron al mismo sin recibir un solo peso de vuelta.

El gobierno del Frente Sandinista y Daniel Ortega le dio largas a esta lucha con el fin de desgastarlos, engañándolos y negociando migajas (un bono solidario) que cuando querían les daban y cuando no querían simplemente no se los entregaban.

Apoyo masivo de jóvenes y población

Durante esta última lucha que incluyó la toma del INSS, la UNAM recibió el apoyo de la población y de la juventud nicaragüense. Sin embargo los jóvenes fueron reprimidos violentamente por la Policía Nacional y por las fuerzas de choque del gobierno sandinista, lo que ha sido un golpe político muy grande, ya que la población nicaragüense en general se volcó en apoyo a estos ancianos.

Luego de agredir y apresar a varios jóvenes, a los cuales les robaron y lesionaron a como lo hacía la guardia somocista, el gobierno se tomó las calles con la Juventud Sandinista y los trabajadores públicos para hacer un llamado a la paz y "apoyar la justa lucha", sin embargo el daño ya estaba hecho.



Decreto 28-2013

El 19 de Julio, en el 34 aniversario de la Revolución, Daniel Ortega comunicó en su discurso pronunciado en el acto oficial que daría la pensión reducida a los adultos mayores, y firmó frente a toda Nicaragua el Decreto Presidencial 28/2013, en cual establece: "Artículo 56. En los casos en que el asegurado que ha cumplido 60 años de edad no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado al menos 250 semanas, tendrá derecho a una pensión de vejez reducida proporcional, de acuerdo a los siguientes parámetros: a) Desde 250 hasta 400 semanas cotizadas: C$ 1,200.00 (Un mil doscientos córdobas); b) Desde 451 hasta 600 semanas cotizadas: C$ 2,000.00 (Dos mil córdobas); c) Desde 601 hasta 749 semanas cotizadas: C$ 2,800.00 (Dos mil Ochocientos córdobas)" (El Nuevo Diario; 22 de Julio del 2013).

Una vez firmado el decreto, ha quedado la duda sobre de dónde saldrá el dinero para el pago del mismo, ya que semanas antes el presidente del INSS aseguró que no hay dinero y que de entregarlo, el INSS se iría a la quiebra. Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público aseguró que "Es un tema de seguridad social, que se atiende dentro de la seguridad social. Esto representa según mis cálculos, que puede andar en unos 600, 700 u 800 millones de córdobas. No los tengo, pero podría ser un poquito más, anual. Pero este es un tema en que estamos haciendo un análisis, vamos a compartir los números con el Seguro Social para tenerlos afinados" (La Prensa, 23 de Julio del 2013).

Según declaraciones brindadas por Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el dinero no saldrá del INSS sino de los trabajadores y de las empresas que aportan dinero al Seguro Social. De igual manera criticó la forma de pago que pretende hacer el gobierno, ya que no debería de ser por rangos (La Prensa, 25 de Julio del 2013).

Por una pensión reducida, justa y actualizada

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) emplaza al gobierno de Ortega y el Frente Sandinista a que entregue una pensión reducida justa y equivalente a las semanas cotizadas por cada uno de los adultos mayores; que sea actualizada y proporcional al deslizamiento de la moneda en la actualidad. Los salarios que recibían estas personas en sus años laborados no se comparan a los actuales ni al valor de la canasta básica el día de hoy, es necesario hacer un estudio económico que permita actualizar estos datos porcentualmente.

La pensión reducida que el gobierno pretende entregar es una burla más a estos ancianos, es la legalización del mal llamado bono solidario que les entregaban. Además de la pensión reducida la lucha del adulto mayor exigía atención médica gratuita y de calidad, una canasta básica, equipos médicos y prótesis, entre otras demandas.

No permitamos que el gobierno una vez más nos engañe con migajas, exijamos una pensión reducida justa, equitativa, proporcional y actualizada, así como seguro médico y alimentos para nuestros trabajadores ancianos.

EXIJAMOS AL GOBIERNO QUE AUMENTE EL GASTO EN EDUCACIÓN

Por Marcial Rivera

Algunas semanas atrás fue presentado el estudio titulado “El financiamiento de la educación en El Salvador”, por parte del Ministerio de Educación (MINED), la Fundación de Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), tal como informaba la Prensa Gráfica (17/07/13): “El estudio sustentará la campaña que emprenderán dichas instituciones para abogar porque el presupuesto para educación alcance el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”

¿Por qué es necesario elevar el nivel de inversión?

Debe destacarse que el nivel de inversión en educación en El Salvador ha sido de forma sistemática excesivamente bajo. Guatemala, Haití y El Salvador, se destacan por tener niveles de inversión bajos en materia educativa, lo que se refleja en los porcentajes de analfabetismo, índices de desarrollo humano bastante bajos, deserción escolar y mano de obra poco calificada. Esta realidad complica el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y del Plan 2021, entre otros.

En promedio puede afirmarse, con base en los datos de UNESCO, que el promedio de inversión en materia educativa no ha sobrepasado del 4% en los últimos años, sobre todo en los gobiernos de derecha, en los que incluso hubo periodos de reducción en este ramo, lo que tuvo y tiene sus consecuencias para el país. Tanto UNESCO, como FIECA propusieron una Ley para el Financiamiento de la Educación, como una alternativa para la inversión en el ramo educativo, que a su vez se complementaría con inversión municipal como indica El Diario de Hoy (17/07/13): “La propuesta anterior, que por lógica conlleva la necesidad de que en el país se haga un esfuerzo por mejorar los niveles de crecimiento económico, también va acompañada de otra: la creación de un fondo de inversión municipal en educación”. Por otro lado, también se contempla la posibilidad de blindar un mínimo de inversión en educación, desde la Constitución misma; de esta forma un presupuesto justo y equitativo estaría garantizado para la educación. De cualquier forma, un eventual aumento de inversión educativa implica no solo la correcta y transparente fiscalización de este aumento, sino además implicaría que el gasto se condujera de forma correcta, para priorizar la contratación de educadoras y educadores, la incorporación de material bibliográfico a las bibliotecas escolares, equipamiento computacional, frente a los gastos operativos.

¿Propuesta?

Sin embargo, la prioridad principal se configura frente a elevar el nivel de inversión del PIB en educación. En la misma nota se hace la siguiente propuesta: “Un modelo propone invertir el 6% del PIB ($150 millones) de cara al 2015 si se quiere lograr 100% de cobertura preescolar, 75% en Secundaria y 100% en alfabetización. Otro modelo implica invertir 7.5% ($764 millones) de cara al 2021, pero si se prolonga el cumplimento al 2025 requerirá 10%.”

Lo que debe tenerse claro, es que el tema de la inversión en educación, debe convertirse en una política de Estado, y no en una política de gobierno, para darle continuidad a este tema y en tal sentido la propuesta y eventual aprobación de la Ley para el Financiamiento de la Educación, podrá convertirse en la expresión concreta de esta política de Estado. Un pueblo sin educación vive a expensas de la voluntad de la clase dominante; sin embargo, esta clase dominante necesita de mano de obra calificada para emplearla.

Los padres de familia, estudiantes, educadoras y educadores con sus gremiales deben estar alertas para exigir que, en caso de que esta ley sea aprobada, el incremento de la inversión estatal en educación garantice una enseñanza gratuita y de calidad; no permitiremos que, como se pretende hacer en otros países centroamericanos, la inversión estatal incluya subvenciones a establecimientos educativos privados, que no son más que un lucrativo negocio.

Esto va de la mano con una reforma al sistema educativo, que contemple inversión en equiparación de tecnologías de información y comunicación; pero más que esto, debe apuntar a la edificación de un sistema educativo liberador y emancipador, más que tecnificador y orientado a proporcionar mano de obra calificada al capital explotador. Cualquier incremento en la inversión estatal en educación debe ir acompañado, para su financiamiento, de aumento en impuestos a las ganancias de los empresarios. Los sectores populares debemos exigir al gobierno este urgente aumento en los gastos de la educación. También debemos exigir que representantes de los estudiantes, maestros y padres de familia fiscalicen el gasto del gobierno en este importante rubro.

PLANTA CEMENTERA: PRIMERA PIEDRA Y DISCORDIA

Por Juan Castel

El pasado 19 de julio del presente año, se anuncia el inicio de las obras de construcción de la planta productora de cemento "San Gabriel", a inmediaciones de San Juan Sacatepéquez, municipio del departamento de Guatemala. A los ya atípicos desfiles de corbata y traje, se le unió la prensa burguesa y representantes gubernamentales encabezados por el servil presidente Pérez Molina, que participando en el acto de "colocación de la primera piedra" se apresuró a secundar a los representantes del capital industrial, pregonando de nuevo el desarrollismo, "que según ellos", solo puede venir de mano de los empresarios rapaces.

Frente a ello, las doce comunidades de San Juan Sacatepéquez realizaron una manifestación que contó con una participación masiva, y el 22 de julio emitieron un comunicado reivindicando nuevamente el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Con presencia de los ya concurrentes antimotines, Mario Orellana, gerente de Operaciones de Cementos Progreso dijo "que se trata de la inversión más grande que ha realizado la compañía, fundada hace 113 años" (Prensa Libre 19/07/13).

Pero este proyecto ya lleva algunos años de aplazamiento. Desde el anuncio del proyecto "San Juan" han pasado casi siete años. Pero esos años de retraso se debe a la resistencia de los pueblos en contra de esta nueva injerencia del capital. "El 21 de Junio, la cementera comienza a trabajar, al día siguiente, el gobierno militariza el municipio, tal y como lo hacían las sangrientas dictaduras de ultraderecha. Alrededor de 2000 militares y 2000 policías, se apertrecharon en dicha comunidad con las excusa de un estado de prevención (forma solapada de un estado de sitio) que solo serviría para reprimir y encarcelar a 43 ciudadanos que organizaron la resistencia en contra de la ocupación gubernamental de su municipio" (ESCA 74: julio de 2008).

Sin miedo a llamar al recuerdo, lo sucedido hoy en día en San Juan, era lo que denunciaba nuestro periódico sobre la represión del gobierno de la semi-bandera social de Álvaro Colom, que ni socialdemócrata, ni populista utilizó con una mano la paloma de la paz y con la otra el estado de prevención, para de esa forma defender la inversión de la burguesía tradicional.



Movilización contra la Cementera

La implantación de la ya hegemónica "Cementos Progreso, S.A." en San Juan Sacatepéquez, siendo más precisos en las comunidades de "la finca San Gabriel Buena Vista y las aldeas San José Ocaña y San Antonio Las Trojes I y II", desconoce los derechos de las comunidades maya kaqchikeles de la zona, que ocupará la cementera; unas 836 hectáreas, de las cuales la empresa afirma, solo utilizarán 64, las demás serán empleadas en la reforestación de un sector boscoso y un vivero.

La prensa burguesa con la cementera ha recalcado "Además de la planta de cemento, la empresa ha llevado al municipio programas de reforestación, capacitación y apoyo a los planes de desarrollo local" (El Periódico 19/07/13); se les olvidó mencionar la carretera de 14kms que construirá la cementera para poder conectar este jugosos proyecto con la CA-1 y poder movilizar el cemento producido. Al finalizar su construcción la carretera será donada al Estado de Guatemala, en palabras del gerente Mario Orellana. Pero lo que no resalta la prensa burguesa es la persecución abierta contra los líderes comunitarios; el pasado 6 de julio fueron detenidas 3 personas miembros de las comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, entre ellos Mariano Camey Car, Lorenzo Car Hernández y Margarito Camey Zet. Su detención tuvo lugar un día después de una multitudinaria marcha en rechazo a la cementera.

Y es un jugoso proyecto, porque con la planta de San Juan –que será a su término, la segunda más grande de América latina- y junto con la de San Miguel en el departamento del Progreso, la compañía busca que a inicios de 2017, cuando la planta empiece a producir, la empresa pase de 2.8 millones de toneladas a 5 millones de toneladas anuales. Lo que la habilitaría a cubrir la demanda nacional –unos 3.8 millones de toneladas- y poner expandir el mercado por todo el istmo centroamericano.

Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a las valientes comunidades a proseguir su lucha y a organizarse, ante la confabulación del gobierno central con los intereses empresariales, que buscan lapidar a este pueblo bajo su sobre producción y sus ganancias. Al gobierno que libere a los presos, arrestados arbitrariamente para defender los intereses del capital. "Por la madre tierra, la lucha seguirá hasta el triunfo. Fuera la Cementera".

POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES:

FRENEMOS LA REPRESION CONTRA POBLADORES DE RÍO BLANCO

Por: Justo Severo Izquierdo

El pasado 15 de julio se cometió un crimen más en contra de dirigentes campesinos; esta vez le tocó al compañero Tomás García, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). El dirigente fue atacado por efectivos militares cuando se dirigía junto a su hijo Alan García, quien salió gravemente herido, a una toma pacífica por la defensa del río Gualcarque en el sector de Achotal, Río Blanco, Intibucá.



Comunidad Lenca se opone a la construcción de proyecto hidroeléctrico

"Agua Zarca", es el nombre del proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en un espacio territorial que atenta contra el patrimonio cultural del pueblo Lenca. Estos son un grupo étnico con una población cercana a los cien mil habitantes y viven aproximadamente en cien comunidades entre los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz. Históricamente, es el grupo más importante y numeroso de Honduras. Los Lencas opusieron una larga resistencia en el occidente y el centro del país contra la conquista española en 1536, siendo su máxima figura el cacique Lempira, que con su gallardía y tenacidad mantuvo a los soldados españoles en vilo, hasta que finalmente en 1537 y 1539 fue vencido junto a sus guerreros por las argucias en el arte de la guerra de los Iberos.

Asesinato de Tomas García

La muerte de Tomás García, está ligada por la oposición que sostiene este grupo étnico contra la construcción de la represa "Agua Zarca", que lejos de beneficiar a los intereses de la población, va en menoscabo de los bienes comunes como el agua, suelos, bosques etcétera, que están en consonancia con la vida espiritual del pueblo Lenca. El conflicto se da a raíz de la concesión que le brindó el Estado de Honduras a la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima, DESA y la transnacional China SINOHYDRO, de construir una represa hidroeléctrica.

Como es de esperarse en este tipo de negocios capitalistas, cuyo afán es arrasar con todos los recursos naturales, sin percatarse de los enormes estragos que esto conlleva en la cultura de los pueblos, las autoridades agilizaron un trámite amañado y en un santiamén aprobaron los permisos para la explotación de la zona, sin previa consulta y participación de la comunidad Lenca, que por cientos de años han ocupado esos territorios como legados ancestrales. Los empresarios capitalistas, con el fin de monopolizar y privatizar los servicios de energía y el agua para generar exorbitantes sumas de dinero, pretenden despojar a los pueblos indígenas de sus bienes comunes.

El gobierno, lejos de solventar la crisis, más bien la ha agudizado al confabularse con los ejecutivos de la empresa transnacional, al respaldarlos mediante el envío de fuertes contingentes militares y policiales, para sumarse a los grupos de seguridad privada de la empresa con el propósito de reprimir y asesinar a cuantos se opongan y pretendan desbaratar un negocio lucrativo para unos pocos, que traerá miseria y explotación para muchos. La comunidad de Río Blanco mantiene una lucha de más de 120 días con protestas en las afueras de la empresa, marchas y el cierre del paso a maquinarias y técnicos de la compañía constructora. Esto ha permitido que los ejecutivos militaricen la zona en conflicto, como estrategia para instaurar el terror y miedo en los pobladores, a través de las amenazas, represión y asesinatos selectivos de dirigentes. En el mismo conflicto han sido amenazados a muerte y persecución política y judicial, los miembros del COPINH Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño.

Unidad contra la represion

Ante tales acontecimientos, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), repudia los actos represivos en contra de la comunidad Lenca y dirigentes del COPINH, quienes libran una heroica lucha de resistencia por la defensa de los recursos naturales y nos unimos a clamor de todas las instituciones combativas y de lucha para que se castigue a los hechores y autores intelectuales del vil asesinato del compañero Tomás García.

Al gobierno le exigimos que retire tropas y policía de la zona y al Congreso Nacional le exigimos que suspenda definitivamente las concesiones a la empresa DESA-SINOHYDRO. El gobierno debe de garantizar el derecho de los pueblos de elegir su propio modelo de desarrollo y de implementar como política gubernamental la protección de la biodiversidad y fuentes de agua.



34 años después:

EL SANDINISMO VIVE SU MEJOR MOMENTO

Por Melchor Benavente

Como una fiesta casi religiosa, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) celebró el 34 aniversario del triunfo de la insurrección popular contra Somoza, llenando completamente la plaza La Fe (antes Carlos Fonseca Amador) y desbordando la recién ampliada avenida Simón Bolívar.



Contrario al pronóstico de la oposición burguesa, que anunciaba un nuevo periodo de caos económico, como el vivido durante la revolución (1979-1990), este segundo gobierno sandinista vive su mejor momento: economía estable y en crecimiento, que garantiza una sólida base de apoyo social al FSLN.

Las cifras macroeconómicas indican que el país progresa lentamente, en relación a los 16 años de gobiernos neoliberales que sirvieron sólo para desmantelar la propiedad estatal y poner en orden las finanzas públicas, pero a un enorme costo social. Esta relativa estabilidad económica ha generado estabilidad política, y una bancarrota estrepitosa de la oposición política burguesa. El atisbo de mejoría económica ha generado grandes expectativas e ilusiones, ha recompuesto y aumentado la base social electoral del FSLN, que ha logrado cruzar el límite del tradicional 38% de los votos hasta obtener, en las últimas encuestas, una aprobación superior al 60%.

Por ello es que Nicaragua es actualmente el país que tiene menores índices de luchas obreras y sociales, en relación al conjunto de Centroamérica. Pero no todo lo que brilla es oro. En este marco de mejoría, la clase media y los trabajadores asalariados son los más castigados, porque las políticas igualmente neoliberales del gobierno de Daniel Ortega castigan duramente a la clase media (pequeños negocios, profesionales, etc.), con un aumento de la carga tributaria, y con una política de deslizamiento cambiario del 6% anual que devalúa constantemente al córdoba en relación al dólar.

El salario real ha descendido un 15% en los últimos 3 años, a pesar del crecimiento de la economía agroexportadora, como producto del deslizamiento y la inflación. Esta devaluación programada del Córdoba en relación al dólar estadounidense reduce los niveles adquisitivos de los trabajadores y de los sectores populares, produciendo una dolarización real de la economía. Entonces, la estabilidad macroeconómica se ha logrado a costa de la clase media y de los asalariados.

¿Cuál es la principal base de apoyo social del FSLN? Son los sectores más pobres, quienes han tenido algún tipo de mejoría como producto de los subsidios focalizados que son financiados con la ayuda venezolana. También están los empresarios pequeños, medianos y grandes, ligados al boom agroexportador de alimentos (carne, café, frijoles, mariscos,) que son beneficiados con la política de deslizamiento cambiario.

Los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que el PIB de Nicaragua crecerá el 5%, el segundo más alto de Centroamérica (después de Panamá) y el quinto en importancia en América Latina. Evidentemente que en relación al rezago de Nicaragua, este crecimiento del 5% es ultra mínimo.

Este contexto de pujanza económica brinda estabilidad política al régimen bonapartista, con rasgos autoritarios. Esta situación perjudica a la oposición burguesa que se ha quedado sin banderas de agitación política. La política económica del sandinismo es absolutamente burguesa, neoliberal. El único eje de ataque que tiene la dispersa derecha es la "lucha contra la dictadura", pero una reciente encuesta de MyR demuestra que la absoluta mayoría de la gente prefiere la estabilidad económica a la institucionalidad democrática.

Por ello hay muy pocos movimientos sociales de lucha contra el gobierno sandinista. Y cuando estos existen, son desarticulados, como ocurrió recientemente con la lucha de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) por la pensión reducida de los trabajadores ancianos. El Bonapartismo sandinista, con la habilidad política que le caracteriza, cuando vio que la lucha iba a salirse de sus cauces, golpeó la mesa pero hizo concesiones parciales. El hecho de que el gobierno sandinista tenga todavía recursos económicos para hacer concesiones mínimas, en un periodo de agudización de la crisis del capitalismo a nivel mundial, nos brinda la clave de la estabilidad política en Nicaragua.

Los socialistas centroamericanos debemos analizar correctamente la realidad, por muy dura que esta sea. El margen de maniobra del gobierno sandinista irá disminuyendo en la medida en que las masas hagan su propia experiencia y se reduzcan los índices de crecimiento, producto de la crisis del capitalismo mundial.

URGE LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA PARA LAS ELECCIONES DEL 2014

Por Emilio Young Barría

Las próximas elecciones generales a realizarse en el año 2014, y la legalización de varias opciones, plantean un enorme desafío a la izquierda panameña.

El FAD: incipiente fenómeno de independencia de clase

Después de una larga pero entusiasta campaña de recolección de firmas, durante un año y medio, el nuevo partido Frente Amplio por la Democracia (FAD) logró vencer las duras condiciones establecidas en el antidemocrático Código Electoral, logrando que más de 81,000 personas adhirieran o apoyaran dicho proyecto. Con ello superó ampliamente el requisito legal de 63,457 adherentes, equivalentes al 4% de los votantes de las pasadas elecciones del año 2009.

Esta nuevo partido político fue constituido por varios sindicatos, entre los que podemos mencionar el Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el Consejo de Unidad Sindical (Conusi) y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), entre los más importantes.

El surgimiento del FAD refleja el ascenso de las luchas obreras y populares en Panamá en los últimos años, y la cristalización de un fenómeno de independencia política de los trabajadores, y de ruptura con los partidos patronales, especialmente con el Torrijismo que ha sido durante mucho tiempo el partido que más ha influenciado y controlado a los trabajadores y los sectores populares.

Congreso, programa y elecciones internas

Después de cumplir con las formalidades legales, según el Código Electoral el FAD debe realizar el primer Congreso Nacional y efectuar elecciones internas o primarias para escoger el candidato presidencial y candidatos a diputados para las elecciones del año 2014.

Aunque el FAD se autodefine de izquierda, y simpatiza con el chavismo, todavía debe aprobar el programa político y los principios en su primer congreso que deberá realizarse el próximo 10 de Agosto. La aprobación de un programa anticapitalista, que refleje los intereses obreros y populares, pasa a convertirse en el aspecto decisivo, central, de este incipiente fenómeno de independencia política de los trabajadores panameños.

El entusiasmo se ha apoderado del FAD. Saúl Méndez, secretario del Suntracs y directivo nacional del FAD, declaró hace poco que "El pueblo va a tener una opción presidencial del movimiento popular y sindical. Este es un partido que no tendrá gamonales como en la partidocracia de los partidos CD, PRD, Panameñista y los otros dos satélites del PP y el Molirena".



Fernando Cebamanos, médico oncólogo, presidente del FAD, ha declarado que la escogencia del candidato presidencial "será ampliamente democrática". Esta democracia desde abajo es clave para atraerse a otros sectores. El sindicalista Genaro López se perfila como el precandidato con más fuerza para ganar esa nominación dentro del FAD.

La candidatura independiente de Juan Jované

El profesor Juan Jované es ampliamente conocido en Panamá. En el año 2003 la presidenta Mireya Moscoso lo destituyó del cargo de Director de la Caja del Seguro Social (CSS), por oponerse vigorosamente a la privatización de la seguridad social.

En el año 2088 intentó postularse como candidato independiente, pero el Tribunal Electoral mediante una resolución lo dejó fuera del proceso electoral. En esta ocasión, Jované ha vuelto a la carga, reuniendo la cantidad de firmas necesarias para obtener la postulación de candidato independiente.

Según la Ley 54 de 2012, que reformó el Código Electoral, los tres primeros precandidatos que obtengan la cantidad de firmas necesarias se convierten en candidatos independientes, con derecho a obtener financiamiento electoral de 50 centésimos por cada adherente inscrito.

Otras candidaturas independientes

Existen otras candidaturas independientes que luchan por su inscripción, impulsando el tedioso trabajo de recolección de firmas. Entre ellas debemos mencionar a Priscila Vásquez, combativa dirigente sindical del sector salud, que ha organizado huelgas y movilizaciones y que también se ha opuesto a la privatización de la CSS.

Urge una interna abierta y democrática del FAD.

El Código Electoral obliga al FAD a realizar elecciones internas. Es una magnífica oportunidad de abrir las puertas a todas las corrientes de izquierda y del movimiento obrero, para lanzar una candidatura única, que no refleje solo al partido FAD, sino al conjunto del activismo sindical y demás sectores populares.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exhortamos a la dirigencia y militancia del FAD, a impulsar un proceso de unidad de todas las fuerzas de izquierda, para que vayamos unidos a las elecciones generales del 2014. Las elecciones internas del FAD deben abrirse para que participen todos los precandidatos y a través de la discusión democrática se elija a los mejores candidatos, no solo para presidente, sino también para diputados, alcaldes y representantes de corregimientos.

